

cuadernos de contra la CORRIENTE

Revista teórico-política de la LIGA COMUNISTA -IV INTERNACIONAL-

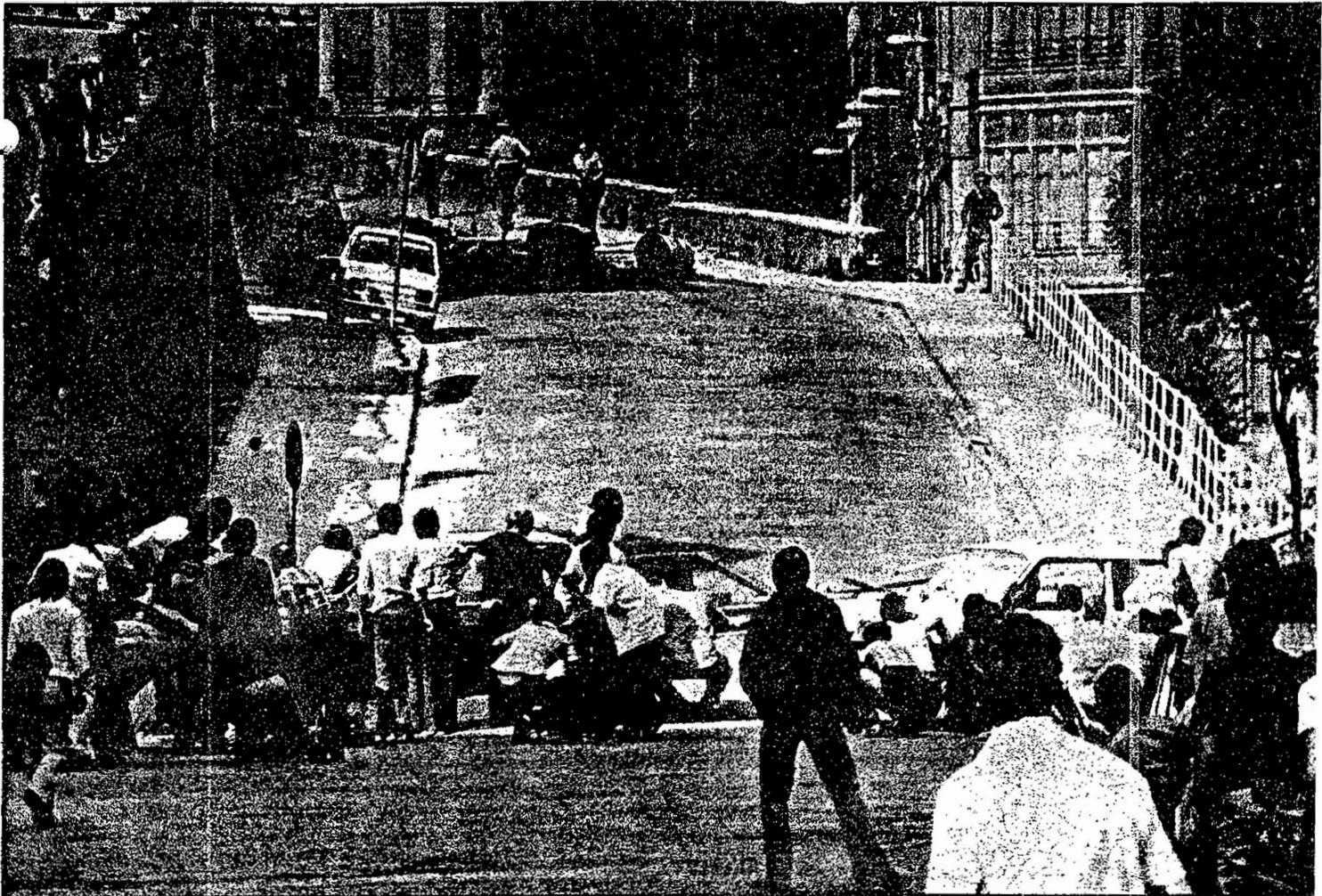
NUMERO 4

ABRIL 1979

PRECIO 18 ptas

EL PROGRAMA
SOCIALISTA
PARA EL IRAN

CON EUSKADI Y LOS SINDICATOS CONTRA EL GOBIERNO



CON EUSKADI Y LOS SINDICATOS CONTRA EL GOBIERNO

Informe aprobado por el Comité Ejecutivo de la LIGA COMUNISTA

*Difusión deferencia de Edicions Internacionals Sedov. Para
descargar el resto de documentos de esta serie, enlace desde
imagen del logotipo:*

Edicions Internacionals Sedov



LAS ELECCIONES DEL 1 DE MARZO

RESULTADO DEL FRACASO DE LA POLITICA DE REFORMA.— La mayoría del movimiento obrero se presentó a las elecciones del 1 de marzo con un objetivo: derrotar a los burgueses y franquistas, conseguir la mayoría.

Esto era posible tras las importantes movilizaciones que precedieron a las elecciones y que tuvieron como consecuencia la disolución de las Cortes del 15 de junio.

Estas Cortes eran un mecanismo básico de la Reforma. Su disolución fue una victoria del movimiento de masas. Expresaba de hecho el fracaso de la política de Reforma de la Monarquía franquista. También el de una política de consenso que basándose en ellas permitió a los dirigentes del PSOE y del PCE sostener a un gobierno de franquistas, manteniéndose prácticamente intacto el aparato franquista de Estado.

En efecto, las movilizaciones de masas de enero del 77 (Atocha), del campesinado en marzo del mismo año y la huelga general de Euskadi en mayo por la amnistía, junto con el inicio del desarrollo masivo de los sindicatos a partir de enero de ese año, colocaron a la Monarquía en una situación insostenible. Ya no era posible asegurar su continuidad sin la colaboración directa de los partidos obreros mayoritarios.

Las elecciones del 15 de junio permitieron levantar unas Cortes, con presencia por primera vez de representantes de los partidos obreros, sobre las que se articuló la política de consenso entre un sector de la burguesía y el aparato estatal (UCD) y el PCE y el PSOE. De esta manera se hizo frente al ascenso de un movimiento obrero pujante en su acción y organización.

Otra parte del aparato franquista, representada principalmente por AP, se negaba a este juego con los partidos obreros, con lo que expresaba la división existente en el seno de ese aparato y en la misma burguesía. División originada por las insuperables dificultades para reconciliar a un Estado sustancialmente franquista con unos partidos que a pesar de mantener una política de apoyo a la Monarquía y colaboración con el gobierno franquista de la UCD, se apoyan y reclaman de la clase obrera.

Esta operación de defensa del aparato franquista frente al acoso de la movilización de masas cerraba todas las vías para la integración de la organización obrera, porque buscaba una y otra vez hacerla retroceder.

Las convulsiones de todo el proceso de Reforma corresponden en definitiva a la contradicción establecida por la per-

La colaboración de los partidos en la firma y aplicación del Pacto de la Moncloa y en el alumbramiento de la Constitución no bastaron para dislocar la correlación de fuerzas que las masas impusieron en las movilizaciones de principios del 77 y frente a las que se levantaron las Cortes del 15 de junio.

Las movilizaciones desarrolladas especialmente en el 1 de mayo del año pasado y tras él significaron el fracaso de Suárez en sus intentos de derrotar seriamente al movimiento obrero. La huelga general de Euskadi en julio lo hizo más evidente al tiempo que colocaba la cuestión nacional vasca en primer término. Esto hizo entrar en crisis a toda la política del Gobierno y al Gobierno mismo, y, más allá, al conjunto del aparato de Estado.

Ante esta crisis, la mayoría de la burguesía y el aparato coincidieron una vez más en el objetivo de asegurar la integridad del aparato y los mecanismos de dominación franquistas, negándose rotundamente a realizar las concesiones que la relación de fuerzas y el mantenimiento del consenso exigían. Importantes sectores quisieron para ello imponer mediante el Ejército y la Monarquía (y pasando por encima de esa UCD empantanada en el consenso) un gobierno "de neutrales". Otros, temiendo la respuesta de las masas, proponían mantener un gobierno formalmente de UCD pero mediatizado directamente, incautado, por Ejército y Banca (apoyándose en la derecha de UCD y en AP). Pero las dificultades eran también fuertes. El aparato en sus esfuerzos por ver cómo imponer su solución experimentó un profundo proceso de dislocación interna, lo que se expresó claramente en los acontecimientos militares de Cartagena, la operación Galaxia y el entierro del general Ortín. De hecho, el mantenimiento de la movilización obrera y de la organización, la lucha de Euskadi como punta de lanza, impidieron a los franquistas cohesionarse y cohesionar a la burguesía en torno a un plan político concreto de gobierno "fuerte".

Otro sector de la burguesía pugnaba por enfrentar la crisis profundizando aún más la política de consenso. Buscaba la incorporación del PSOE al gobierno, en coalición con la UCD, lo que implicaba abordar algunas modificaciones en el aparato y los mecanismos de dominación franquistas, y sobre todo amenazaba con provocar una irrupción de las masas que desbordase todos los planes. Para disminuir el impacto sobre el aparato y las masas de esta opción el PCE pretendía realizarla simplemente con elecciones municipales y sobre la base de las mismas Cortes del 15 J, dejando al PSOE con escaso peso en la coalición. El PSOE no podía aceptar estas condiciones de con-

tes y nuevas elecciones. Pero esto aumentaba el peligro de propiciar mediante la intervención de las masas y como subproducto de su movilización, un proceso de dislocamiento de todo el aparato de Estado.

El aparato franquista, en su mayoría, rechazaba estas opciones.

Pero el rechazo de Euskadi a la Constitución y la imposibilidad de conseguir un acuerdo en el Pacto social, al tiempo que hacían aparecer como más contraproducente aún la imposición directa de un gobierno por los poderes "fácticos" expresaron de manera irreversible el fracaso del juego del consenso tal como estaba establecido. La disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones se daban, pues, en el momento de máxima crisis política de la burguesía, de mayor división y en una situación marcada por el vencimiento de miles de convenios —sin pacto— y el agravamiento al máximo del problema de Euskadi.

Las elecciones permitían a la burguesía concretar políticamente sus opciones, y le forzaban un reagrupamiento para tratar de imponerlas. Su objetivo de preservar el aparato franquista exigía o bien una remodelación global de sus equipos políticos (levantar un nuevo agrupamiento CD y desde aquí atar y modificar a UCD) o bien limitarse a aprovechar la ocasión para atar y mediatizar más fuertemente ese flan ucedista. Pero, al mismo tiempo, eran un fuerte riesgo que la burguesía no había podido evitar, por el margen que daban a la intervención de las masas en esa situación de convenios y de radicalización de las masas de Euskadi. Apoyándose en esa amenaza, los partidarios del gobierno de coalición intensificaron su campaña. Pero ellos eran los primeros que temían esa amenaza.

En estas circunstancias el movimiento obrero se encontraba frente a un reto de gran envergadura: unir y desarrollar sus luchas organizando la huelga general frente a los to-



pes del Gobierno y por unos convenios justos, movilizarse en solidaridad con Euskadi y ganar la mayoría en las elecciones para imponer con todo ello un gobierno de sus partidos y sindicatos sin ningún ministro burgués. La mayoría en las Cortes no garantizaba por sí misma el desmantelamiento del aparato franquista, pero sí introducía una contradicción insalvable. Y sobre todo jugaba un papel importante en la afirmación política del proletariado, daría alas a su movilización, a la confianza de la clase en sus fuerzas. Lanzadas las masas por ese camino, cualquier intento de promover un nuevo gobierno franquista encontraría una respuesta mucho más activa. Una mayoría obrera en las Cortes hubiera abierto el camino hacia la ruptura como subproducto de las imposiciones de las masas en lucha.

La LIGA COMUNISTA asumió el reto que ello significaba lanzando una campaña por la unidad obrera para la lucha por los convenios, contra la represión, etc. y por la mayoría obrera en las elecciones con el objetivo de acabar con la Constitución y la Monarquía, por un gobierno del PSOE y PCE sin ministros burgueses.

¿QUE HA PASADO EN LAS ELECCIONES GENERALES? —
No se ha conseguido la mayoría. Por el contrario, la UCD ha conseguido, en general, mantener sus posiciones electorales del 15 de junio.

El carácter profundamente antidemocrático del sistema electoral no constituye una explicación cabal del revés sufrido por el proletariado.

Esta derrota tampoco obedece a avances realizados por las fuerzas franquistas. De hecho la UCD ha contado con un respaldo de menos del 24 por ciento del censo total. A pesar de que en principio debía recoger los votos que el 15 de junio fueron para la Democracia Cristiana y parte de los que ahora ha perdido Fraga, la UCD simplemente ha mantenido posiciones. Ni siquiera ha sido capaz de recoger todos los votos que el 15 de junio fueron a otras fuerzas franquistas, particularmente en Catalunya, País Valencià y algunas provincias andaluzas.

Estos resultados indican que de hecho ha habido un retroceso de los franquistas en relación al 15 J. Esto constituye una pequeña expresión de los profundos cambios sociales operados en estos años.

La causa de esta derrota hay que buscarla en otro terreno. Lo que se ha manifestado en primer término es una profunda división de las filas obreras. De hecho, el proletariado se ha dividido en cuatro grandes bloques: un primer gran bloque, unos cinco millones y medio de votos (no todos obreros) que han votado al PSOE. Un segundo bloque que se ha abstenido. Unos dos millones que han votado al PCE. Y finalmente un gran número de trabajadores que han votado a organizaciones y coaliciones nacionalistas, principalmente a Herri Batasuna y Euskadiko Ezquerria. Hay también un quinto grupo menos significativo que ha votado a los partidos "a la izquierda" del PSOE y del PCE.

Si observamos los lugares donde se han producido los mayores porcentajes de abstención nos encontramos con que centros obreros de gran tradición de lucha como Barcelona, Asturias, Gipuzkoa, Bizkaia, Cádiz y Málaga, con los porcentajes más elevados (35, 40 por cien, etc.).

Por otra parte, el voto nacionalista, especialmente en Euskadi, ha arrastrado a amplios sectores obreros de esta nacionalidad.

De esos datos se desprende claramente que importantes sectores del proletariado que se han movilizado estos últimos meses por sus convenios o que, como en el caso de Euskadi, llevan una prolongada lucha por la soberanía y contra la represión, y que en las elecciones del 15 de junio votan por los partidos obreros, esta vez no lo han hecho.

La conclusión es clara: la desastrosa política llevada por el PCE y el PSOE en los convenios y en relación a Euskadi, ha sido la causa fundamental del fracaso sufrido en las elecciones, de la división que en ellas se ha manifestado y que es en definitiva la que hace aparecer hoy a la UCD como "victoriosa".

En efecto, desde el momento en que se anuncian las elecciones generales, el PSOE y el PCE se lanzan a desarrollar un esfuerzo divisor sin precedentes. La crisis política de la burguesía, el peligro de la irrupción revolucionaria de las masas y un dislocamiento institucional de la burguesía lo exigían. Tenían que impedir la unificación de las luchas de convenios y la lucha de Euskadi, así como un triunfo obrero aplastante en las elecciones. Su objetivo no era otro que proteger la retirada ordenada de la burguesía hacia una línea de defensa parcialmente nueva definida por el gobierno de coalición: ayuntamientos, autonomías y pasos en el sindicalismo de participación (con el pacto social como perspectiva central), manteniendo lo más posible del aparato de Estado y las bases fundamentales de la Reforma del 15 J, expresadas en la Constitución. El PCE, al no haber podido mantener las Cortes del 15 de junio para garantizar el peso predominante de UCD en el proceso y por tanto limitar las concesiones y reformas del aparato lo más posible, buscaba reproducir en las elecciones ese peso predominante de UCD, debilitar el del PSOE, y conseguir él el mayor respaldo posible para poder entrar (con la baza de las CCOO) en los pactos contrarrevolucionarios. Prefería arriesgarse a un triunfo de los proyectos franquistas antes que un descalabro de la Reforma e incluso a un peso predominante del PSOE en el posible gobierno de coalición (por el peligro de reacciones de las masas y el aparato ante esto). El PSOE necesitaba conseguir mayor fuerza para evitar el proyecto de la mayoría de la burguesía y forzar un gobierno de coalición con fuerte peso suyo, pero también subordinaba esto a la necesidad fundamental de impedir una irrupción de las masas.

Este apoyo de ambos a la Monarquía mediante una política de gobierno de coalición se centró en primer lugar en los CONVENIOS, frente a la movilización de millones de trabajadores, la más masiva desde la guerra civil. PSOE y PCE hubieran querido estos convenios con pacto social y sin mezclar con elecciones. Eran una tremenda amenaza "desestabilizadora" en un momento de crisis política abierta y sin la mordaza del pacto. El decreto-ley de topes transformaba la movilización por los convenios en una lucha contra el gobierno y contra todo lo que este gobierno representaba: la Reforma del 15 J.

La PLATAFORMA establecida por las direcciones para desorganizar la ofensiva obrera respondía al programa del gobierno de coalición con el que iban a tratar de contener el dislocamiento de la Monarquía en el caso de que los trabajadores abortasen los proyectos franquistas. No han podido evitar que los convenios se lanzaran contra un decreto del Gobierno, como batalla claramente política. Pero han tratado de convertirlos en una lucha por el programa con el que ellos fueron a las negociaciones del pacto social, y que es parte del programa de un gobierno de coalición respetuoso al cabo con la Monarquía y la Constitución. Ni siquiera lanzaron la batalla como lucha contra el gobierno, porque no querían enfrentar a la clase con la UCD, sino subordinarla a ésta. Se trataba, pues, de una plataforma "económica" que no cuestionaba el tinglado franquista, una plataforma económica de división: tope del 16 por ciento, aumentos proporcionales, no reducción de horas, aumentos de ritmos, puerta abierta a la reducción de plantillas (siguiendo el modelo italiano de Luciano Lama y Berlinguer). Una plataforma económica antiobrera, que es una plataforma política de apoyo a la Monarquía.

Pero subordinar la clase y sus organizaciones a las exigencias de la burguesía exige subordinar los sindicatos y trabajadores a las instituciones burguesas, al aparato franquista y la empresa. Por ello las direcciones se han esforzado por asegu-

rar en sus plataformas y planes para los convenios la subordinación a laudos, arbitrajes, mecanismos legales sobre convenios. Y en particular los comités de empresa.

En la práctica, han aceptado las exigencias económicas de la patronal y el gobierno: topes del decreto o más bajos. Y mecanismos que en teoría rechazan: el lock-out (no oponiendo ocupaciones y planteando en la práctica ceder) y el decreto de topes.

Ha sido un pacto social sin firma, en que se partía de la plataforma de las burocracias para el frustrado pacto social y se aterriza en admitir la plataforma de la patronal y el gobierno franquista para ese mismo frustrado pacto social. O, en el mejor de los casos, a medio camino.

Es decir: la defensa del gobierno de coalición con los franquistas se ha evidenciado como la defensa de los mecanismos de dominación franquistas.

Como en toda política de pacto social, la otra cara de la subordinación a la política burguesa y sus instituciones es la desorganización obrera. El esfuerzo desorganizador tenía que ser más intenso por no haber firma y porque en un momento de crisis política abierta la lucha masiva por los convenios podía encontrar con mayor facilidad el camino de la huelga general revolucionaria. Para lograr esta división y desorganización no bastaba con la plataforma.

Necesitaban DESORGANIZAR LA ACCIÓN, cortar la generalización. Incluso la lucha que parte de reivindicaciones mínimas y recortadas se transforma en lucha abiertamente política en cuanto se transforma en huelga general (al tiempo que desborda entonces en el mismo terreno económico los objetivos iniciales).

Nunca desde el primer semestre de 1977 (antes del 15 de junio) los trabajadores han pugnado con tanto ahínco por la HUELGA GENERAL como en estos convenios. Eran cientos de miles los que la reclamaban conscientemente hace pocas semanas. Es toda la clase la que ha tratado en los hechos de abrirse camino a la huelga general con sus piquetes masivos de extensión, su obstinación en ir a la huelga total indefinida, sus esfuerzos por unificar la acción de los distintos sectores, su ocupación de las calles. Este potente movimiento, articulado inicialmente en torno a limitadísimos objetivos económicos, recortados por las direcciones hasta el extremo, de ningún modo puede entenderse al margen de la crisis de la Reforma del 15 J.

Todavía está por inventar la huelga general económica, y para los leninistas el proceso de la huelga política de masas es único, combinando lo económico y lo político. En efecto, las movilizaciones por los convenios son la explosión de la presión de la clase que hizo fracasar el intento de pacto social dentro del marco del 15 J. Y ese fracaso fue elemento fundamental del hundimiento del 15 J.

Frente a ese potente impulso de la clase hacia la huelga general, estalinistas y socialdemócratas tuvieron que echar mano de todo el arsenal de recursos para fragmentar y desgastar la acción obrera que han puesto a punto las burocracias sindicales de Europa, y que se empezaron a experimentar en los convenios del año pasado: huelgas intermitentes, paros limitados...

Cerrar el paso así a las reivindicaciones y a las formas de acción proletarias sólo puede intentarse apoyándose en la desorganización que las direcciones estalinista y socialdemócrata han creado en el último año y medio (liquidación de comités elegidos, supresión de la soberanía de las asambleas, liquidación del papel de las secciones sindicales, burocratización de los sindicatos). Pero incluso esto es insuficiente. Las experiencias que se dieron en los convenios de 1978 de organización de la lucha desde algunos sindicatos, de relación entre sindicatos y asambleas, habían de ser extirpadas. Y ello implicaba la anulación de los mecanismos normales de centralización de cada sindicato local —plenos, coordinadoras— e incluso secciones.

Incluso los propios comités de los sindicatos son anulados, para que actúen directamente las ejecutivas provinciales o estatales.

Las burocracias han levantado auténticos muros para que los sindicatos no pudiesen convertirse, bajo la presión de la lucha, en centros organizadores de ésta. Evidentemente, no lo han conseguido en todos los casos, pero en estos convenios se han dado pasos muy importantes en la desorganización de los sindicatos. Mientras, las asambleas eran igualmente marginadas para firmar a sus espaldas incluso en convenios de empresa. Y, por supuesto, toda centralización zonal mediante comités de huelga sindicales o asambleas debía ser abortada.

No se podía combatir la huelga general sin cargarse sus centros organizadores.

No se podía propiciar la formación de un gobierno de coalición para proteger el aparato franquista sin atentar contra la organización obrera.

Este esfuerzo a tope de las direcciones estalinista y socialdemócrata se tuvo que concentrar en cortar los pasos de los trabajadores en su acción independiente, hacia la huelga general, porque cada uno de ellos alimentaba procesos de reorganización. Y al mismo tiempo conducía al enfrentamiento político con el aparato franquista (más incluso que a la recuperación de los auténticos objetivos de clase en el aspecto económico).

COMPLICES DE LA POLITICA TERRORISTA DEL GOBIERNO.— Mientras el Gobierno, con la colaboración de Giscard-Barre, hacía coincidir la convocatoria de elecciones con una nueva ESCALADA REPRESIVA contra Euskadi, el PSOE y el PCE han discrepado de algunas medidas pero manteniendo claramente su apoyo al Gobierno. Han discrepado del traslado a Soria, del decreto-ley de Seguridad Ciudadana, de los malos tratos... Con esto expresaban la corrección "democratizadora" de los métodos represivos que formarían parte del programa de un gobierno de coalición. Pero PCE y PSOE ni siquiera han hecho campaña contra esos hechos. Sólo en ocasiones aisladas Felipe González habló de los derechos humanos de los "criminales terroristas", de sacarlos de Soria... No digamos ya la absoluta negativa a movilizar a los trabajadores contra lo que reconocen como violación de los derechos humanos... Es una muestra de la firmeza con que pensaban promover desde el gobierno las ridículas reformas de la política represiva. El apoyo al aparato franquista y a sus representantes gubernamentales pasa delante.

Y en cambio sí han mantenido como un eje de campaña fundamental la lucha contra el "terrorismo": "un gobierno firme para garantizar la seguridad", "desarma con tu voto al terrorismo". El apoyo a los cuerpos represivos, la denuncia de los "crímenes terroristas", y el apoyo del PSOE a la represión de Giscard contra los vascos muestran que el proyecto del Gobierno de coalición incluye la pretensión de relanzar la campaña antiterrorista de división con una envoltura "democrática", tratando de que así presentada tenga mayor eco que cuando apareció tal campaña como apoyo descarado a la represión de un gobierno de franquistas.

Pero además el Gobierno ha extendido —como habíamos anunciado y denunciado los trotskistas— la represión "antiterrorista" contra todo el movimiento obrero, y en particular contra los derechos sindicales y los sindicatos (decreto-ley de Seguridad Ciudadana contra los piquetes). La respuesta de los burócratas de CC.OO. y UGT a ese atentado no ha podido ser más miserable. Por supuesto, "han denunciado". Pero no sólo se han negado a reconsiderar toda su política antiterrorista, sino que ellos mismos han combatido en la práctica (con mucho mayor eficacia que el Gobierno) los piquetes y las huelgas "salvajes", por ejemplo la de FASA, dejando pasar en cambio la represión gubernamental contra los huelguistas en más de una ocasión, es decir, apoyándola.

La negativa de las burocracias sindicales a combinar la lucha contra la represión con la lucha por los convenios, incluso cuando el Gobierno la relacionaba y atacaba a los sindicatos, la colaboración —aunque sea indirecta— con la represión ha sido un factor suplementario en la desorganización de los sindicatos, en alejarlos de los intereses y luchas de los trabajadores. Sobre todo en Euskadi.

Ni el PSOE ni el PCE han olvidado hacer de la defensa de LOS ESTATUTOS DE LA CONSTITUCION un eje fundamental de su campaña por el gobierno de coalición, tratando así de hundir más en el seno de la clase esas cuñas divisoras.

Esta bandera contrarrevolucionaria, que en el caso de Euskadi es una provocación abierta a la inmensa mayoría que rechazó la Constitución, se ha visto acompañada de un paso práctico en la imposición del centralismo monárquico a Euskadi: las Juntas Generales. PSOE y PCE, junto con el PNV, han aceptado (aun denunciándolo) el montaje por Martín Villa de esos órganos falsamente representativos de las provincias históricas de Euskadi. Y además, con unos mecanismos electorales completamente falseados.

La campaña de municipales, que en Euskadi ha sido también de elecciones a esas juntas (y al organismo correspondiente en Nafarroa, que es el Parlamento Foral), se convirtió así en una campaña por el Consejo Vasco, la preautonomía y el Estatuto no sólo como programa político del PSOE y el PCE, sino como puesta en pie de un mecanismo institucional concreto que tiene este significado.

Con las elecciones MUNICIPALES, PSOE y PCE han pretendido proteger el aparato de estado franquista (a costa de inevitables reformas del mismo a nivel municipal), haciendo de los elegidos, de los "ayuntamientos democráticos", una cobertura del mantenimiento del aparato centralista (incluida su estructura provincial) y de los apéndices locales que forman parte de ese aparato. Y ello con unos objetivos concretos: incorporar los ayuntamientos a una eficaz política de austeridad capitalista que es contraria a la lucha contra el paro, las necesidades de los trabajadores en el terreno de servicios sociales; reforzar el papel del aparato municipal en la represión; y para ello promover la participación de los sindicatos y trabajadores en la gestión del aparato estatal a ese nivel municipal. Es decir, establecer bajo etiqueta democrática unos puntales para desarrollar a partir de ahí todos los aspectos de su política de división.

En suma, ha sido la política de gobierno de coalición que buscan PCE y PSOE, la que ha sido puesta en práctica, más intensamente que nunca, desde el momento en que se convocaron las elecciones, para contener la crisis del Régimen. Era inevitable la afirmación del marco "constitucional" monárquico-franquista en la que se apoya la política del pretendido gobierno de coalición. Y de ahí se ha derivado todo el programa de ese gobierno: el paro, los topes, el desmantelamiento de servicios, la represión, los estatutos, las bases yankees, las agresiones coloniales en Africa,... el pacto social y las leyes antisindicales, los mecanismos de participación y desorganización.

Sólo ahogando la lucha obrera, desorganizando las huelgas y sindicatos, podían aspirar a los objetivos del gobierno de coalición. Pero esto, como se ha demostrado, además de ser condición para mantener al régimen ha servido de paso para combatir contra la mayoría obrera en las mismas elecciones.

La mayoría obrera significaba UTILIZAR LAS ELECCIONES PARA FAVORECER LA LUCHA DE MASAS CONTRA LA MONARQUIA Y LA CONSTITUCION, POR UN GOBIERNO OBRERO CONTRA LA MONARQUIA Y LA CONSTITUCION, Y PARA DISLOCAR EL MARCO INSTITUCIONAL. Pero eso entraba en contradicción flagrante con el mismo plan electoral del PCE y del PSOE. Por eso también

en el terreno electoral han promovido la división entre los obreros socialistas y los obreros comunistas. Y en definitiva mediante su política liquidadora ante los convenios y el problema de Euskadi, han empujado a amplísimos sectores a la abstención o al voto al nacionalismo.

De esta manera, la política de coalición, en lugar de abrir cauces que permitan modificar parcialmente los mecanismos de dominación franquistas, sólo tiene como consecuencia el reforzamiento de las bases del franquismo, cerrándose, así, las vías para cualquier modificación de las estructuras franquistas.

Estas y no otras han sido las causas de la derrota sufrida en las elecciones generales, derrota que hay que sumar a la sufrida en las luchas de convenios y en la lucha en solidaridad con Euskadi, frente a la furia centralista y represiva del gobierno de la Monarquía.

La mayoría conseguida en las municipales, a pesar de la política de división del PSOE y el PCE, introduce importantes modificaciones que valoraremos más adelante.

TRAS LAS ELECCIONES, ¿QUE PERSPECTIVAS SE HAN ABIERTO?

LA VICTORIA DE UCD NO RESUELVE LA CRISIS DE LA MONARQUÍA.— Como hemos dicho, la "victoria" de UCD se ha dado a costa de una derrota de las masas en la lucha de convenios y en el propio terreno electoral. Sin embargo, esta victoria no ha sido producto de un avance social de los franquistas. De hecho, y a pesar de estas derrotas parciales, el Régimen no ha experimentado ninguna recuperación de su base social, base que en los dos últimos años ha perdido en grandes proporciones. La reforma monárquica del franquismo ha sido un fracaso y eso no lo pueden superar a pesar de la victoria electoral. La correlación de fuerzas es hoy mucho más favorable al proletariado que hace dos años.

Únicamente desde estas premisas podemos enjuiciar correctamente la situación abierta tras las elecciones.

En primer lugar, la victoria de UCD se ha dado a costa de la bancarrota de Coalición Democrática. Hoy, Suárez aparece como el representante exclusivo del orden y el aparato franquista. El 15 de junio, la victoria electoral de los franquistas exigió la formación del conglomerado político que ha sido y es la UCD, arruinando cualquier posibilidad de formar agrupamientos políticos burgueses desenganchados del aparato franquista, como la Democracia Cristiana o agrupamientos de "oposición democrática" socialdemócratas. En esta ocasión, a pesar de la bancarrota de la política de Reforma protagonizada por UCD, y a pesar de su propia crisis interna, el peligro de una mayoría obrera ha empujado al grueso de las fuerzas burguesas y franquistas a aglutinarse tras esa misma UCD, a costa de un tremendo fracaso de CD-AP. Nuevamente se ha demostrado la incapacidad de la burguesía, profundamente vinculada al estado monárquico-franquista, para formar y mantener agrupamientos políticos distintos a la UCD.

Pero la UCD no representa en votos más que la quinta parte del censo electoral, a pesar de la terrible división introducida por el PCE y el PSOE. Y, lo que es más grave, la UCD no tiene un plan político viable con el que ganar el apoyo o la tolerancia de la mayoría de la población.

Cuando mayor era la crisis en el Estado, y como consecuencia en la misma UCD, las dos corrientes básicas que coexisten en su seno dieron pasos que amenazaron con la integridad de la propia UCD. Por un lado, los sectores socialdemócratas pugnaron por dar una mayor profundidad a la política de consenso, que virtualmente estaba agotada, preparando la formación de un gobierno de coalición con el PSOE tras las elecciones. Por otro lado, los llamados sectores democristianos de UCD, totalmente identificados con el aparato franquista de estado, obligaron al conjunto de la UCD a desarrollar una política de preservación del aparato franquista y de sus mecanismos de dominación, rechazando el flirteo con el PSOE.

Y es con esa política como la UCD se ha asegurado el apoyo del grueso del aparato de estado, desplazando por el momento a la corriente socialdemócrata. Así, articuló una ofensiva en toda regla contra los convenios, con el decreto de topes, la aplicación de las medidas franquistas de arbitraje, el decreto de seguridad ciudadana contra los piquetes, y el establecimien-

to de verdaderos regímenes policiacos en las empresas, así como mediante la intensificación de la política represiva y centralista contra Euskadi.

La campaña electoral de la UCD con que ha aglutinado al grueso del franquismo ha sido una campaña explícita contra el gobierno de coalición con el PSOE e incluso, más allá de esto, contra la política de consenso.

Es decir, en el terreno de los hechos políticos anteriores a la campaña, la UCD ha aplicado una política de alianza con la CD. Ante el fracaso de la Reforma y la política de consenso que la sustentaba, la UCD ha ocupado el espacio político de AP. Esto no quiere decir que la UCD se haya convertido en una nueva Alianza Popular. Esto lo que indica es que en una situación en la que el peligro de dislocamiento institucional era más que evidente, la UCD la ha enfrentado optando momentáneamente por soluciones de autopreservación política del propio aparato de estado, a costa del consenso con los partidos obreros. Por otra parte, indica que las dificultades para desarrollar de aquí en adelante una política de consenso con los partidos obreros serán mucho mayores.

Así, nos encontramos con que el primer acto político de importancia realizado por la UCD después de las elecciones, ha sido colocar de nuevo presidente del Congreso, cuyo papel en estas Cortes va a ser decisivo, a Landelino Lavilla, jefe del ala cristiano-franquista de UCD y que fue quien protagonizó, en el Congreso de UCD, la maniobra contra los "socialdemócratas".

MAYORES AGRESIONES A LAS MASAS.— El respiro obtenido por la UCD en estos convenios y elecciones van a aprovecharlo para profundizar los ataques a las masas en todos los terrenos. Máxime teniendo en cuenta la división y desorganización creada en las filas obreras por la política del PCE y del PSOE.

Las tasas de inflación de los dos primeros meses del año (2.2 por ciento), ponen en entredicho toda la política económica de Abril Martorell. Queda en evidencia la fragilidad de los topes "antiinflacionistas", conseguidos a costa de una dura política de depreciación de salarios y aumento del paro. Necesita endurecer aún más la política de topes salariales y profundizar la política de reestructuraciones, "saneamientos" de servicios públicos y desmantelamiento de servicios sociales. Necesitan abordar la segunda fase del plan naval, los planes de reestructuración en la siderurgia y en la industria del automóvil. La aplicación de estos planes de reestructuración y desmantelamiento comportará miles y miles de nuevos despidos, el cierre de numerosas empresas y una profunda degradación de las condiciones de vida y trabajo de las masas.

El abrumador incremento del paro que ello supondría irá acompañado por otra parte, de una reducción relativa del dinero asignado al seguro de paro.

En relación con todo ello, la legislación por las "nuevas" Cortes de las leyes en materia sindical y de contratación colec-

tiva tratarán de que suponga una perpetuación de los mecanismos franquistas contra los derechos sindicales de las masas y, en definitiva, nuevos atentados contra los mismos sindicatos.

Por otra parte, el problema de las nacionalidades, en especial Euskadi, cobrar una importancia de primer orden. El gobierno de la Monarquía se ve ante la necesidad de profundizar su política centralista y represiva, en una situación mucho más grave que en ningún otro momento. El rechazo masivo de Euskadi a la Constitución española, en la que se apoyan el Consejo General Vascongado y el estatuto cocinado por el PNV y el PSOE, se ha visto confirmado en las elecciones por el auge espectacular del nacionalismo radical que se presentó a la campaña electoral rechazando al Consejo General, al estatuto y a las Cortes de la Monarquía. En estas circunstancias el Gobierno de Madrid no tiene otra salida que apoyarse en el estatuto del Consejo General y en el mismo PNV para ahogar la lucha de Euskadi por su soberanía. Sin embargo, la aceptación, sin más, de ese estatuto por el Gobierno acarreará serios problemas. Los conciertos económicos, policía autonómica, etc., que reclama el PNV, aunque se plantean en el marco de la Constitución y de la negativa ala autodeterminación de Euskadi, constituyen aspectos difícilmente asimilables por el aparato de estado franquista. Su aceptación supondría una importante modificación de los mecanismos con los que el franquismo ha mantenido su dominación sobre las nacionalidades.

En este contexto, la complicidad de los partidos obreros con la política represiva del Gobierno contra Euskadi, tendrá como consecuencia, tal y como ya se ha visto, el desarrollo de esta política a niveles más generales, mediante la acopción de medidas tendentes a dislocar la acción de masas y de los propios sindicatos y partidos.

LOS LIMITES DEL CONSENSO.— La UCD sabe que no dispone de la fuerza suficiente para aplicar un plan de esta envergadura sin contar con el apoyo más o menos encubierto del PCE y el PSOE. Como hemos dicho, la derrota sufrida por las masas en la lucha de los convenios y en las mismas elecciones generales no significan de ningún modo la resolución de la crisis social y política que arrastra la Monarquía, especialmente agravada tras los acontecimientos del segundo semestre del año pasado.

Es más, en las elecciones generales, a pesar de los resultados habidos, no han podido impedir que aparecieran descarnadamente el conjunto de factores que minan la integridad de la Monarquía. Entre ellos, y de manera especial, el problema de Euskadi.

Esto se ha visto plenamente confirmado en las elecciones municipales. En efecto, la mayoría obrera conseguida en la mayoría de las grandes capitales, así como la victoria nacionalista en Euskadi, constituyen además de un poderoso estímulo a la acción de las masas, un importante factor de crisis en el sistema institucional del Régimen.

La incapacidad para articular un pacto social y aliviar el grave problema de las nacionalidades, que en la fase precedente determinaron el fracaso de la política de Reforma, aparecen ahora como los obstáculos fundamentales para una política de consenso con los partidos obreros.

El hundimiento de CD y la aparición de la UCD como único garante político del orden franquista expresa claramente la dificultad, aún mayor que antes, para enfrentar la solución de la crisis económica y de los problemas nacionales mediante un pacto global con el PSOE y el PCE. Las tendencias políticas que representan directamente al aparato de Estado en el seno de UCD cobrarán con toda probabilidad nueva fuerza. Es el precio del apoyo prestado a la UCD por el grueso del aparato franquista a costa del hundimiento de CD.

En estas circunstancias, la presión de la CEOE y la Banca sobre el Gobierno para que éste acometa una política "antiinflacionista" más dura; reduzca el déficit del presupuesto del Estado y profundice la política de reestructuraciones y desmantelamiento de servicios sociales difícilmente puede ir acompañada de contrapartidas políticas y sindicales que propicien un acuerdo global con las direcciones de los partidos y sindicatos obreros.

Si bien existe una disposición clara de éstas a la hora de acordar la puesta en práctica de los planes de reestructuración, el PCE y el PSOE se ven obligados a reclamar una mayor flexibilidad en la legislación en materia de acción sindical, negociación colectiva y medidas de arbitraje de los organismos autonómicos y municipales. Por otra parte, la necesidad que tienen de jugar a fondo con los ayuntamientos para constituirlos en "intermediarios" entre el Gobierno y las masas, así como para avanzar en la integración de los sindicatos en el aparato del estado, les obliga a ofrecer resistencia a la reducción del déficit presupuestario y en cierta medida a la política de desmantelamiento de los servicios sociales.

Estas son sus condiciones para avanzar en la parcial modificación de los mecanismos de dominación franquistas, en el terreno local y sindical, especialmente planteada tras los resultados de las municipales.

Sin embargo, la presión de la CEOE y la Banca sobre el Gobierno evidencia las tremendas dificultades que éste va a tener para realizar acuerdos globales mediante concesiones en las materias explicadas.

Por otra parte, los resultados de las municipales en Catalunya, Euskadi, principalmente, indican una mayor agravación del problema nacional. La abrumadora mayoría obrera en Catalunya, y el claro retroceso de UCD en beneficio de CiU, disloca completamente el plan de Suárez y Tarradellas para enfrentar el problema de Catalunya.

Sin embargo, Euskadi se convierte en el problema central de este gobierno y en un obstáculo de envergadura para lograr un acuerdo global con los partidos obreros y nacionalistas.

La abrumadora mayoría nacionalista y dentro de ello el creciente ascenso del nacionalismo radical, ponen en peligro la viabilidad de todo el plan político del nuevo gobierno.

El Gobierno necesita apoyarse en el PNV y el CGV para enfrentar el problema de Euskadi, y esto en una situación en la que crecientes sectores del proletariado y las masas vascas se pronuncian por la ruptura con el estatuto del CGV preparándose a un enfrentamiento directo con la Monarquía.

Sin embargo, la aceptación por el Gobierno del estatuto del PNV supondría a su vez un factor de crisis temendo en todo el aparato de Estado, especialmente la policía y el Ejército. Existen dos puntos fundamentales de este estatuto difícilmente asimilables por el Gobierno: la policía autonómica y los conciertos económicos. El PNV difícilmente puede hacer concesiones a Madrid, especialmente en el segundo.

En cualquier caso, la dinámica abierta a nivel de masas, de ruptura abierta con la Monarquía, el CGV y su Estatuto, constituyen el problema central que amenaza, ahora con mayor gravedad que en los meses pasados, el desplazamiento del Ejército y la policía. La incautación por el Ejército de las carteras de Defensa y Orden Público es una auténtica declaración de guerra contra Euskadi. El choque directo entre las masas y el Estado difícilmente va a ser evitado por la política del PNV, del PSOE y el PCE, que pugnarán por dividir a Euskadi del resto del Estado, utilizando a fondo un estatuto que, por otra parte, difícilmente puede ser asimilado por el Régimen.

Euskadi es la piedra de toque de la lucha de las masas frente al Gobierno y la Monarquía. Junto a él los problemas económicos y sociales constituyen la base para un desarrollo de la acción y organización del movimiento de masas.

PCE-PSOE: ACUERDOS CONTRA LA ORGANIZACION OBRERA.— En esta situación, los dirigentes del PSOE y del PCE se aprestan a desplegar una intensa actividad encaminada a impedir el desarrollo de la acción independiente de las masas frente a la Monarquía. Tratarán de profundizar la política de desorganización, siendo conscientes de la existencia de mayores dificultades a raíz de la situación creada tras las elecciones.

Por ello deben jugar a fondo con la mayoría conseguida en las municipales.

Por un lado, firman acuerdos sectoriales para imponer los planes de reestructuración. Para ello comprometen a CC.OO. y UGT, mediante la participación en las llamadas "comisiones de seguimiento", etc., en la aplicación del plan naval, siderúrgico, etc. Esto constituye una brutal agresión contra la organización obrera a todos los niveles.

Por otra parte, tratarán de apoyarse en los organismos autonómicos para imponer estos planes a escala de las nacionalidades.

Sin embargo, con esto no aseguran de ningún modo la participación plena de los sindicatos en la gestión de los planes de austeridad y saneamiento.

En este sentido, tratarán de imponer el control de los sindicatos a escala local mediante su inserción en los ayuntamientos. El control de los organismos provinciales y locales desde las concejalías laborales u organizaciones similares, desembocará en una política de destrucción sistemática de las uniones locales. En este sentido, dotar a los ayuntamientos y organismos autonómicos de atribuciones de ARBITRAJE en los conflictos sociales, es una condición importante para avanzar en la aplicación de este plan contra la independencia y la misma existencia de los sindicatos. Sin embargo, no cabe duda de que chocará con la reacción de la CEOE y del propio gobierno.

Este plan tiene como blanco fundamental la independencia de la UGT, y a otro nivel de las CC.OO. Pero de hecho constituye una parte de un proyecto más general contra la organización obrera. A escala de empresa necesitan revitalizar los comités de empresa, en una situación crítica tras el papel desempeñado en las últimas luchas de convenios, mediante un apoyo abierto de los sindicatos, recurriendo si es preciso a nuevas elecciones que ayuden a represtigiarlos ante los trabajadores.

Por otra parte, la victoria en las municipales abrirá un proceso de asambleas de pueblo, barrios, etc., en un intento de las masas por consolidar y controlar la victoria conseguida.

En este sentido, la puesta en pie de juntas de distrito en las que integrar los movimientos y organismos de la juventud en los barrios, de los parados, etc. irá acompañada de un intento por revitalizar el aparato de las Asociaciones de Vecinos, de cara a obstaculizar el desarrollo de asambleas y organismos independientes de los vecinos.

Este es un plan global encaminado a dislocar la organización de las masas que chocará con dos obstáculos fundamentales:

* por un lado, el desarrollo de la movilización ante las agresiones contra las nacionalidades, especialmente Euskadi, la aplicación de los planes de reestructuración y la profundización de la política de desmantelamiento de servicios.

* por otro, la encarnizada resistencia del aparato de estado, del Ejército, la Policía, la Iglesia, la Banca, la CEOE, a cualquier intento de modificar los mecanismos de dominación franquistas frente a las nacionalidades, en el terreno sindical, educativo, etc.

ALIANZA OBRERA FRENTE A LOS ATAQUES DEL GOBIERNO

* **SOLIDARIDAD CON EUSKADI.**— Euskadi es el blanco fundamental del programa del Gobierno de la Monarquía. Como explica la declaración difundida por KOMUNISTEN LIGA (LC) con ocasión del ABERRI EGUNA, "este es un Gobierno de guerra contra los trabajadores de todo el Estado y en particular contra Euskadi. El Gobierno prepara un choque frontal con Euskadi para imponer una derrota decisiva. Pero no lo tiene nada fácil. Cada día está más clara la disyuntiva abierta: o la Monarquía hunde al pueblo vasco o Euskadi, con los trabajadores al frente y en estrecha alianza con los obreros del resto del Estado, pone patas arriba a la Monarquía."

" LA LUCHA DE LOS OBREROS Y EL PUEBLO VASCO HOY OCUPA EL LUGAR CENTRAL EN EL ENFRENTAMIENTO DE TODA LA CLASE TRABAJADORA DEL ESTADO CON EL GOBIERNO. La solidaridad con Euskadi y sus derechos nacionales es una batalla fundamental de todos los obreros del Estado. Son los mismos intereses en juego."

La solidaridad con Euskadi pasa por organizar la movilización en todo el Estado:

A) 1. Contra toda imposición del Gobierno de Madrid:

Abajo el Estatuto de la Constitución española.
Abajo el Consejo General vascongado, apéndice del Gobierno de Madrid.

Abajo el Parlamento y Diputación forales. Abajo las Juntas de Martín Villa.

2. Contra las maniobras secesionistas sobre Navarra: derecho de Euskadi a la unidad.

3. Por el derecho de Euskadi a la autodeterminación: que quiere decir derecho a la independencia si así lo decide.

4. Por el derecho de Euskadi a dotarse de los organismos que libremente decida.

B) Contra la represión:

Abajo el decreto-ley "antiterrorista", el de seguridad ciudadana y los 15 puntos de M. Villa. Presos vascos a Euskadi.

Amnistía total.

Disolución de las fuerzas de "orden público".

La lucha en solidaridad con Euskadi debe extenderse a la exigencia de libertades y derechos de todas las nacionalidades oprimidas, reivindicación tradicionalmente defendida por el movimiento obrero de todo el Estado y que es hoy una bandera irrenunciable.

El movimiento obrero, en particular los sindicatos, deben oponerse a los estatutos de una Constitución impuesta que niega el derecho de las nacionalidades a la autodeterminación. La más mínima claudicación en este punto abriría una profunda división en las filas obreras y significaría una victoria fundamental para el aparato franquista.

* ORGANIZAR LA LUCHA FRENTE AL PARO, LOS EXPEDIENTES DE CRISIS Y PLANES DE REESTRUCTURACION, Y LOS TOPES SALARIALES.— La clase obrera, los trabajadores, no pueden admitir las pretensiones de la CEOE y el Gobierno de incrementar el paro, reducir plantillas, desmantelar servicios sociales, ni los topes salariales. No pueden admitir que los sindicatos queden subordinados a la política y al Estado de los burgueses: **NO AL PACTO SOCIAL!**

FRENTE AL PARO Y LOS PLANES DE REESTRUCTURACION, trabajadores activos y parados han de unirse por la reducción de la jornada y ritmos, el reparto del trabajo existente y el control obrero de la producción.

Los sindicatos deben organizar la lucha por las 35 horas de trabajo a la semana, sin disminución de salarios ni aumento de ritmos, como medida para absorber el paro que actualmente existe. La lucha por las 35 horas debe ir ligada al combate por imponer la **ESCALA MOVIL DE HORAS DE TRABAJO**, de acuerdo con los índices establecidos por los sindicatos en función del paro existente en cada momento.

En esta vía, cualquier imposición de los trabajadores en cuanto a reducción de la jornada laboral, sin disminución de salarios ni aumento de ritmos, será un paso importante que deberá acompañarse de la exigencia de que nuevos compañeros en paro sean incorporados al puesto de trabajo.

¡Abajo el plan de reestructuración de la industria naval y textil! No pasarán los planes siderúrgico y del automóvil.

Por la nacionalización, bajo control obrero, de las empresas en crisis y fincas mal explotadas.

Por un plan de obras públicas y un plan de ordenación de cultivos al servicio de las necesidades sociales y la creación de puestos de trabajo.

Por un seguro de paro desde los 16 años. Por la entrega de las oficinas de empleo a los sindicatos y el control por estos de la contratación y formación profesional.

La defensa del **PODER ADQUISITIVO** pasa en primer lugar por la lucha por romper el decreto de topes salariales y la exigencia de aumentos lineales iguales. Ningún salario inferior a las 35.000 ptas., incluidos parados, jubilados y pensionistas. Escala móvil de salarios fijada por los sindicatos. Reforma fiscal radical y seguridad social a cargo del Estado.

* **POR LA LIBERTAD SINDICAL. DERECHOS SINDICALES PLENOS.**— Para hacer frente a los ataques del Gobierno y organizar la lucha por las necesidades más acuciantes, hay que cerrar filas en torno a los sindicatos.

Además de mantener el decreto de regulación salarial y la legislación contra los piquetes, las huelgas y las manifestaciones, pretenden imponer en los próximos meses las leyes de acción sindical y de negociación colectiva, que, en caso de aplicarse, supondrán graves atentados contra la libertad sindical. Además pretenden imponer la movilidad de plantillas y otros ataques mediante proyectos de relaciones laborales y el llamado "estatuto del trabajador".

Tienen en cartera todo un conjunto de leyes antisindicales cuya aplicación ocasionaría un daño mortal a las conquistas que en el terreno sindical tantos años de lucha han costado a los trabajadores.

Los sindicatos deben organizar inmediatamente grandes movilizaciones frente a estos atentados: por la libertad sindical, por los plenos derechos de acción y negociación de secciones y sindicatos. Por los plenos derechos de asambleas, huelga, manifestación. Por la devolución del patrimonio sindical. Organizar ya ocupaciones en todos los pueblos y ciudades de los locales sindicales que siguen en manos del Estado.

El éxito de esta lucha pasa por la más estricta **INDEPENDENCIA** de los sindicatos.

CC.OO. y **UGT** no pueden comprometerse en la aplicación de los planes de reestructuración, sino que deben organizar la lucha frente a ellos.

¡Fuera los sindicatos de las "comisiones de seguimiento"! Ningún compromiso de los sindicatos con los consejos laborales de los organismos autonómicos.

Contra la cogestión y participación en Consejos de Administración, Seguridad Social, Instituto de Empleo...

Los comités de empresa levantados según decreto del Gobierno se ha demostrado que son instrumentos para hurtar a los trabajadores y sindicatos la capacidad de decisión sobre sus intereses y su lucha. La libertad sindical pasa por romper con estos organismos y eliminarlos, dando todo el protagonismo a las secciones sindicales y a las asambleas de trabajadores.

* **POR UNA POLÍTICA DE CONTROL DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.**— Tras las elecciones municipales, el conjunto del movimiento de masas y en especial los sindicatos se enfrentan a un nuevo problema: aunque en muchos ayuntamientos sigue habiendo mayoría franquista, en los más importantes los trabajadores han impuesto su mayoría. ¿Cómo enfrentar la política de aquellos ayuntamientos que no representan de ningún modo la voluntad libre de la población y de los que sólo se pueden esperar medidas antiobreras y antidemocráticas? Y, sobre todo, ¿cómo utilizar la mayoría obrera en beneficio de la lucha de las masas por el conjunto de sus necesidades?

Es verdad que la victoria conseguida supone un enorme estímulo para la lucha de las masas, además de un grave problema para los caciques franquistas y para todo el aparato de estado.

Pero no es menos cierto que los ayuntamientos, aun con mayoría obrera, están sujetos al poder por medio de la legislación de Régimen local. Que la "autonomía municipal" es, hoy por hoy, una quimera. Que los presupuestos de los ayuntamientos dependen en lo fundamental de las decisiones del Gobierno franquista.

Si los concejales obreros aceptan las reglas del juego establecidas por los franquistas, lo más que podrán hacer serán unas pequeñas mejoras y decir que no es posible nada más porque el Gobierno no les da dinero ni atribuciones. Pero eso significaría en la práctica que todo quedaría igual que antes y que, en de-



con etiqueta socialista o comunista. De esa manera los miembros de los partidos y sindicatos obreros que están en los ayuntamientos quedarían convertidos en meros agentes del Estado, en gestores de los intereses de las inmobiliarias y de los capitalistas en general.

Y no sólo eso, sino que si esos concejales piden a los sindicatos su participación, su ayuda en esa labor, tendríamos a los sindicatos entrampados en el mismo juego. Esto convertiría a los sindicatos en instrumentos del Gobierno. Sería un golpe para todos los trabajadores y para los mismos sindicatos.

Los trabajadores tenemos que capitalizar a nuestro favor la mayoría que hemos conseguido en los ayuntamientos. Para ello, en primer lugar, es necesario que, con los sindicatos a la cabeza, las organizaciones obreras se unan en los pueblos, ciudades, nacionalidades y en todo el Estado para organizar la lucha a todos esos niveles contra el paro, los expedientes de crisis, por la satisfacción de todas las necesidades en materia de servicios sociales (sanidad, educación, vivienda, transporte, etc.).

Elaborar a todos los niveles planes de acción municipal en los que se recojan los puestos de trabajo que hay que crear en función del censo de parados existente en cada pueblo, barrio o ciudad. Los centros que hay que crear para asegurar una asistencia sanitaria adecuada; organizar la ocupación de viviendas vacías y construcción de nuevas viviendas para alquilarlas a precios baratos; etc.

En base a estos planes de acción municipal, organizar asambleas de pueblo, barrio, etc. con intervención de los sindicatos. Y presionar a los concejales obreros para que el ayuntamiento recoja estos planes y los ponga en práctica, asegurando su ejecución mediante el control por los sindicatos y las asambleas de vecinos, imponiendo el DERECHO A VETO ante todas las medidas que perjudiquen los intereses de la población.

Nos dirán: "Es que no podemos hacer esto, porque el Gobierno no nos da dinero". La única manera de conseguirlo será mediante la lucha y ésta deben organizarla los sindicatos y asambleas. Y exigiremos a los ayuntamientos que se pongan del lado de los trabajadores frente al Gobierno que niega la satisfacción de las necesidades más elementales.

Los concejales obreros solos no pueden tirar adelante un plan de este tipo. Por eso es imprescindible que los sindicatos y asambleas no queden entrampados, no se conviertan en instrumentos y gestores de la miseria del Gobierno franquista. Para organizar la lucha, que será imprescindible, es necesario que mantengan su independencia.

Quien debe mandar es el pueblo. Por eso también hay que exigir a los concejales que pongan su cargo a disposición del pueblo en cualquier momento. Las juntas de distrito deben ser directamente elegidas y también revocables.

Hay que acabar con la legislación de Régimen Local, hay que imponer la autonomía municipal. Y sobre todo imponer al Gobierno que pague los presupuestos necesarios para ejecutar el plan municipal que satisfaga las necesidades sociales.

Para todo esto, y más que nunca, necesitamos sindicatos fuertes por su democracia interna y por el peso de las secciones de empresa. Más que nunca hace falta una organización democrática de los sindicatos y uniones locales. Sindicatos que no capitulen, que encabezen la lucha en todas partes, en las fábricas, en los barrios y pueblos, en todo el Estado.

Por eso nos opondremos de manera intransigente a cualquier intento de diluir las secciones en los comités de empresa, las uniones locales en los ayuntamientos y las federaciones en ejecutores de planes de reestructuración o similares.

Más que nunca, necesitamos que los sindicatos impulsen asambleas en las fábricas, en las zonas, barrios y pueblos. Que organicen la lucha a todos los niveles contra la CEOE y el Gobierno.

Sólo así recobrarán la fuerza perdida tras un año y medio de consenso con el Gobierno y la CEOE.

* ABAJO EL GOBIERNO. ABOLICION DE LA MONARQUIA Y DEROGACION DE LA CONSTITUCION.— Este Gobierno, ya lo hemos dicho, es un gobierno de guerra contra Euskadi, dispuesto a ahogar la victoria obrera conseguida en las municipales, a meter nuevos planes de reestructuración, etc.

Avanzar en la lucha por cualquiera de las necesidades planteadas es incompatible con la existencia de este Gobierno y del aparato de estado en el que se sustenta.

La Constitución otorga a la Monarquía y al Ejército todos los poderes necesarios para asegurar el mantenimiento de un estado fundado en la negativa total de las libertades nacionales, sindicales, etc. La Constitución ampara numerosos mecanismos autoritarios y de sobreexplotación que han prevalecido durante 40 años de franquismo.

Hay que acabar con todo esto. Los sindicatos deben encabezar la Alianza de todas las organizaciones obreras, para impulsar la lucha en solidaridad con Euskadi, por la libertad sindical y todas las necesidades sociales. Tienen que organizar la movilización frente al Gobierno, a la Constitución y la Monarquía.

Está bien que el PSOE y el PCE se unan para conseguir alcaldes obreros donde hay mayoría. Nosotros apoyamos esto. Pero nos opondremos a cualquier intento de los dirigentes de esos partidos de utilizar esta unidad contra los sindicatos, entrampándolos y comprometiéndolos en los planes del Gobierno. Nos opondremos a cualquier intento de acuerdo con el Gobierno franquista. Les exigimos que rompan con la Constitución, que abandonen la política centralista que se opone a las aspiraciones de las nacionalidades oprimidas. Llamamos a la UGT y a CC.OO., así como a todos los obreros socialistas y comunistas a que así se lo exijan.

Los trotskistas llamamos también a la formación de Alianzas Obreras en todas las nacionalidades.

En Euskadi proponemos la formación de una Alianza Obrera Vasca, encabezada por CC.OO. UGT, ELA-STV y LAB, para organizar la lucha por los derechos nacionales, contra la represión y por todas las reivindicaciones obreras y de los oprimidos de Euskadi.

Esto exige desarrollar una línea de ruptura con el PNV, representante de la burguesía vasca y defensor de los intereses del gran capital español y de su Constitución y, también de ruptura con los agentes del PNV en Herri Batasuna, como son ANV-ESB.

Por una Alianza Obrera Vasca, de unidad revolucionaria de los abertzales revolucionarios del KAS (LAB, HASI, LAIA, ETA(m)) con las fuerzas obreras para defender las necesidades de los trabajadores y el pueblo vasco.

1 DE MAYO: CON EUSKADI Y LOS SINDICATOS CONTRA EL GOBIERNO

Tras la victoria obrera en las municipales y las importantes movilizaciones que en Euskadi se están dando durante este mes de abril (manifestación antirrepresiva del 8 de abril, Aberrri Eguna el 15, semana antinuclear del 21 al 27), el 1 de Mayo debe constituir un importante paso en la acción y organización de masas.

Si el 1 de Mayo del año pasado abrió, junto con las movilizaciones de junio-julio de Euskadi, un proceso de movilizaciones y enfrentamiento con el Gobierno que culminó con la disolución de las Cortes del 15 de junio, este año nuevamente serán las luchas de Euskadi y el 1 de Mayo lo que debe determinar el desarrollo de la acción de masas que haga frente a los planes del Gobierno recién formado.

Este 1 de Mayo tiene que ser un paso importante en la **unidad** de los trabajadores de todo el Estado, y con los de Euskadi, y también en el agrupamiento y organización en los sindicatos.

Hay que preparar el 1 de Mayo en las fábricas, reuniendo a las secciones sindicales y a las asambleas para decidir las consignas y la formación del cortejo en la manifestación. Todas las secciones sindicales tienen que estar en la manifestación con sus propias pancartas y banderas. Hay que oponerse al sectarismo de los dirigentes de CC.OO y UGT sobre los demás sindicatos. Todos los sindicatos en una manifestación. Asegurando una total libertad de expresión.

Hay que preparar el 1 de Mayo en los barrios y pueblos haciendo asambleas preparando la ida a la manifestación.

La preparación y realización de este 1 de Mayo tiene que ser una base fundamental para elaborar los planes de lucha en las empresas, en los barrios... para reorganizar y masificar las secciones y los sindicatos.

Y esto será una condición necesaria para acometer y enfrentar la próxima andanada que el Gobierno pretende lanzar contra Euskadi, los sindicatos y las masas en general.

CONSTRUIR LA CUARTA INTERNACIONAL

Esta orientación de lucha compromete a los trotskistas a bregar para desbrozar el terreno a los pasos adelante que el proletariado deberá dar. Somos conscientes de que los importantes avances de las masas vascas y el paso adelante de las municipales no significan todavía una superación global de la división y desorganización profunda de la clase, y de que el capital puede asestar todavía nuevos golpes aprovechándose de ello. Pero sabemos también que los trabajadores no podrán dejar de agrupar sus fuerzas frente a los ataques del nuevo gobierno, y desde hoy en cada lucha se prepara un nuevo salto adelante en la movilización y organización. Al mismo tiempo, la experiencia de las políticas que han conducido a recientes derrotas ofrece una base para que en el seno de la clase y de sus organizaciones se desarrollen posiciones de lucha de clases enfrentadas a la línea de colaboración con la Monarquía. Esta maduración política es fundamental para preparar tal salto adelante y sobre todo el resurgir de las organizaciones obreras y la construcción de la IV Internacional.

Más que nunca debemos, pues, **ESTAR EN PRIMERA LINEA** de los combates de masas y del esfuerzo por desarrollar sus organizaciones. Y para que esta intervención ayude a la clase debemos ser capaces de **CONCENTRAR NUESTROS ESFUERZOS** en asentar en fábricas y sindicatos los objetivos y los pasos organizativos concretos que entendemos van a jugar un papel clave en la centralización de la lucha. Y sobre esta base contribuir con todas nuestras fuerzas al desarrollo de alas de lucha de clases en las organizaciones obreras de masas, y reforzar las filas y cohesión de la Internacional.

* Por tanto, y sobre la base de la participación en la acción diaria de los trabajadores, debemos en primer lugar organizar una **CAMPAÑA EN SOLIDARIDAD CON EUSKADI**.

Hay que realizar un importante esfuerzo de agitación, organización y movilización en este sentido.

Para ello hay que empezar formando un centro o comité de solidaridad con Euskadi en cada población.

El Comité Ejecutivo de la LIGA COMUNISTA publicó en el mes de marzo una declaración en este sentido que debe ser difundida y utilizada en todas partes para formar los comités. La constitución en Madrid de un comité de solidaridad con Euskadi, apoyado hasta el momento por Herri Batasuna (Unidad Popular), UPG (Unión del Pueblo Gallego), COAS, OCIE y LC es un paso importante aunque todavía incipiente y por consolidar.

Junto a esto hay que trabajar en las secciones sindicales para que asuman este problema. También con todos los compañeros de la fábrica o centro de trabajo, así como en los barrios, institutos, etc. Proponiendo la formación de comités que acometan las tareas propias del centro de trabajo o estudio o del barrio, así como las de la campaña en solidaridad con Eus-

Hay que procurar que las iniciativas que surjan de cualquier sección sindical o agrupamiento de trabajadores se vehiculen a través del centro correspondiente, así como a la inversa. Esto significa que en la medida en que se vaya consolidando el trabajo en las fábricas, barrios, etc. deben elegirse delegados que acudan a las reuniones del comité de solidaridad con Euskadi de la localidad correspondiente.

El trabajo de preparación del 1 de mayo hay que aprovecharlo para que realmente sea un fuerte impulso a esta actividad.

Los comités que se logre formar en cada barrio o centro de trabajo, deben plantearse como objetivo concreto de su actividad la organización y refuerzo de las **SECCIONES SINDICALES** y de las **UNIONES LOCALES** para que éstas asuman las tareas de organización y movilización de masas.

* Junto con esto, debemos aprovechar también la preparación del 1 de Mayo para dar el máximo alcance a otros dos ejes que deben ser fundamentales en la intervención en la próxima fase: la lucha **CONTRA EL PARO** y los **PLANES DE REESTRUCTURACION**, y la lucha por la **LIBERTAD SINDICAL**. Tal como se ha indicado antes, dentro de la amplia gama de ataques en el terreno económico no sólo el paro tiene la mayor importancia, sino que al ser afectados por los planes de reestructuración sectores fundamentales del proletariado se abre la perspectiva de una lucha contra el paro que aglutine a grandes sectores de la clase, parados, afectados por expedientes de menor volumen, etc. tras esos sectores clave. Sin pensar que los primeros planes de reestructuración vayan a provocar automáticamente una gran explosión de masas, debemos contribuir al máximo a preparar la unificación del proletariado en torno a este eje.

Sin embargo, sólo podremos ser eficaces en introducir esta orientación política si sabemos organizar la respuesta de los trabajadores a partir de cada situación concreta y de las agresiones a que se vea confrontado cada sector de la clase.

En cuanto al combate por la libertad sindical, se plantea de manera muy concreta su necesidad en cualquier lucha de cierta envergadura contra los ataques del Gobierno (como ya ha ocurrido en los convenios). Apoyándonos, pues, en las experiencias de lucha debemos levantar desde ahora mismo con insistencia la bandera de lucha contra la serie de leyes que el Gobierno tiene planteadas, reivindicar los derechos de huelga, de las secciones, de asamblea... Y tener presente en cada lucha que enfocar bien desde el principio la cuestión de la libertad e independencia de la organización obrera es ya media victoria.

En cuanto a los esfuerzos de los dirigentes del PSOE y del PCE por meter a los sindicatos en sus bloques de progreso: debemos explicar desde el principio que no hay progreso si los ayuntamientos y organismos no autónomos tienen que aplicar

antidemocráticos y la coalición con burgueses indican que no hay tal independencia respecto del Gobierno). Pero de ningún modo debemos caer en el parasitismo denunciado. Nuestra postura, y la que llamamos a adoptar a todos los compañeros que ven desorganizados los sindicatos en aras de la "participación municipal" y el aparato de las asociaciones de vecinos, es luchar para que los sindicatos, sus locales, y con ellos los vecinos (no el aparato que dice representarles) se organicen para luchar eficazmente por las necesidades de los trabajadores. Es impulsando esto como confiamos en convencer en la práctica a los compañeros que hoy esperan poder conseguir las reivindicaciones a través de los mecanismos de "participación".

No sólo la lucha por la libertad sindical sino igualmente la dirigida contra el paro pasa fundamentalmente por los sindicatos. Quien no sepa trabajar cara a levantarlos de su actual situación lastimosa tampoco podrá preparar otros aspectos de la reorganización obrera ligada a próximos avances en la acción (como por ejemplo los comités de fábrica elegidos en asamblea).

La desorganización de los sindicatos hace particularmente necesario el trabajo, que en cualquier caso debe ser habitual para los trotskistas, de agrupar y cohesionar políticamente a los compañeros que estén dispuestos a bombatir por estos aspectos fundamentales de la lucha de clases hoy, lo mismo que para impulsar la solidaridad con Euskadi. Compañeros sindicados o no, pertenecientes a uno o varios sindicatos. La formación de grupos ocasionales, comités ad hoc, etc. juega un papel a veces insustituible siempre que se basen exclusivamente en el desarrollo de tareas concretas con una línea orientada a la acción de masas y al desarrollo de las organizaciones de masas.

* Esta lucha en los sindicatos y en los centros de trabajo por ir dando respuesta a las agresiones del Gobierno, por unificar a la clase contra el paro, en solidaridad con Euskadi, por la libertad e independencia sindical, por reorganizar los sindicatos y reavivar la actividad política de todos los trabajadores en los centros de trabajo, enfrentada en cada punto a la política del Gobierno choca por lo mismo en cada punto con la orientación colaboracionista de los dirigentes de las grandes centrales. Es más, tras las pasadas experiencias, muchos compañeros no van a incorporarse seriamente a ninguna lucha como no sea con una clara orientación política de romper con el colaboracionismo vigente, torpemente enmascarado tras pataleos en las Cortes. Cohesionar a través de las opciones de la lucha alas de lucha de clases, de independencia obrera contra la Monarquía, en el seno de los sindicatos, aparece así en el punto a que hemos llegado, no como ninguna etapa futura, sino como la tarea de que forma parte cualquier agrupamiento circunstancial para impulsar un paso en la acción de masas.

Pero esta situación del movimiento, cuando éste busca su reorganización y prepara nuevos saltos adelante **SOBRE NUEVAS BASES POLÍTICAS**, sacando lecciones políticas de las derrotas no profundas pero sí repetidas que ha sufrido, da una gran importancia no sólo a la agitación, a las campañas de partido, sino también a la propaganda y al trabajo partidario de organización de los trotskistas.

* Al decir esto no olvidamos otros procesos de decantación política en el movimiento obrero que van estrechamente ligados al desarrollo de alas de lucha de clases en los sindicatos y en las fábricas: los procesos de diferenciación y clarificación política en el seno del PSOE y del PCE. En concreto, nos situamos en el extremo contrario de los compañeros que en nombre del trotskismo acaban de tomar una posición estrechamente sectaria e infantil respecto de miles de compañeros socialistas. Nos referimos al puñado de militantes que han abandonado el PSOE para construir la LCR. Claro que nos felicitamos de que hayan tomado conciencia de la necesidad de construir la IV Internacional. En eso estamos. Pero esto no nos hace ignorar la lucha que siguen llevando sectores importantes del Partido Socialista por hacer de él un partido revolucionario. Si bien los dirigentes han malogrado en buena parte el gran movimiento

de posiciones en torno al XXVIII Congreso tiene la mayor importancia por las repercusiones que tendrá en los próximos saltos adelante del movimiento obrero. Los trotskistas somos solidarios de los compañeros y sectores del Partido Socialista que a la vista de las consecuencias liquidadoras de la línea de colaboración con la Monarquía de la Ejecutiva Federal defienden la UGT y buscan en el marxismo las bases para una orientación revolucionaria. Entendemos que su combate forma parte de los esfuerzos que han de confluír en levantar una Internacional Obrera revolucionaria. Para nosotros esta será la IV Internacional de masas. Aun no entendiéndolo ellos así consideramos indispensable avanzar al calor de la lucha obrera y la colaboración práctica en una franca discusión política.

* POR LA UNIDAD DE LOS TROTSKISTAS EN EL ESTADO ESPAÑOL

La situación política abierta tras las elecciones ofrece grandes posibilidades para avanzar en la construcción de la IV Internacional.

En Euskadi asistimos, desde hace varios meses, a un proceso creciente de ruptura de amplísimos sectores del movimiento obrero con las direcciones de los partidos mayoritarios en el Estado, en este caso el PSOE.

Este era el primer partido de Euskadi el 15 de junio del 77. Ahora, así se ha evidenciado en las elecciones, el PSOE no sólo está muy por detrás del PNV y HB, sino que tradicionales centros socialistas como Eibar, Barakaldo, Hernani... votan mayoritariamente a los nacionalistas.

Amplísimos sectores obreros no han querido votar al PSOE y lo han hecho a Herri Batasuna. Con ello no sólo expresan su ruptura con aquel partido sino también su búsqueda de una dirección revolucionaria.

Asimismo, la mayoría de la juventud vasca se mueve en la órbita política de Herri Batasuna.

Existe la posibilidad material, hoy mismo, de levantar una organización obrera revolucionaria de masas (sin que queramos ignorar ni subvalorar los lazos que las organizaciones tradicionales mantienen con el proletariado de Euskadi). Eso es lo que exigen miles y miles de obreros y jóvenes vascos. **ESTE ES UN RETO AL QUE SOLO PUEDE RESPONDER LA CUARTA INTERNACIONAL** dando grandes pasos en su construcción. Por eso en las elecciones llamamos a votar LKI, era un **LLAMAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CUARTA INTERNACIONAL**. Y que los camaradas dirigentes de la LCR se sorprendiesen ante esto y lo atribuyesen a "extrañas consideraciones" sobre el PSOE y el PCE nos plantea el interrogante de si estos camaradas han comprendido las rupturas que se han dado en el movimiento obrero de Euskadi con los viejos partidos.

Pero si esta es la situación en Euskadi, la que hemos analizado en el resto del Estado, el desgaste de las viejas direcciones y en particular el distanciamiento de la juventud obrera respecto de ellas acucian también a los trotskistas a quitar los obstáculos que se interponen en la construcción de la Internacional.

En particular, la lucha por la **INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD** debe encontrar en el Estado español un punto de apoyo fundamental y ser instrumento privilegiado para la construcción del partido revolucionario en el Estado.

La unidad de los trotskistas es hoy más necesaria que nunca para abordar estas tareas, de cuyo cumplimiento somos responsables ante el movimiento trotskista mundial. Esta unidad debe apoyarse en las bases políticas sobre las cuales se realiza el frente único de la clase en su lucha contra la Monarquía. La unidad de los obreros vascos, y de éstos con los del conjunto del Estado, pasa por la defensa intransigente del derecho de

estatuto de la Constitución española. Pasa por la defensa de la libertad sindical y la independencia de los sindicatos frente a TODOS los organismos del Estado. Pasa, en definitiva, por la independencia del proletariado frente al Gobierno, la Constitución y la Monarquía. Por los procesos de organización y maduración política que en las organizaciones de masas expresan esta orientación de independencia de clase.

Si emulando los pasos adelante del Irán, el Perú y otros países, en el Estado español los trotskistas asumimos resueltamente esta orientación, que necesariamente debe basarse en la juventud obrera, tendremos camino abierto para superar los obstáculos que hasta ahora han impedido levantar unas potentes juventudes trotskistas, y que expresan mejor que ningún otro hecho la crisis de la IV Internacional en el Estado español. Si asumimos esta orientación habremos dado un gran paso en la superación de los factores que han contribuido a nuestro estancamiento y haríamos la contribución que nos corresponde al próximo Congreso Mundial y al avance de todo el movimiento trotskista. Y no sólo se habría terminado la división de los que en el Estado español nos reclamamos de la IV Internacional y su Secretariado Unificado (LCR y LC) sino que un acuerdo sobre estas bases plantearía con urgencia redoblada desde las exigencias de la revolución española la discusión sobre los términos de la unidad con el Comité de Organización

para la Reconstrucción de la IV Internacional y su sección en el Estado español. Es la búsqueda de las exigencias de una política trotskista hoy y aquí, la que enmarca ya las discusiones entabladas entre la L.C. y la Fracción Proletaria en defensa de la IV Internacional así como el debate que tenemos programado con la OCIE.

Abril de 1979



El texto que sigue está reproducido del número correspondiente al 26 de febrero de la publicación trotskista quincenal norteamericana PERSPECTIVA MUNDIAL.

El programa socialista para Iran

Una carta de derechos para los trabajadores y campesinos

El Partido Socialista de los Trabajadores de Irán está llamando a la elección inmediata de una asamblea constituyente para que las masas obreras y campesinas puedan discutir y decidir democráticamente el futuro curso de la revolución iraní. (Publicamos parte de su llamado en este mismo número de 'Perspectiva Mundial'.)

Los trotskistas iraníes han distribuido miles de ejemplares de un tabloide de cuatro páginas en el que presentan su programa para Irán. Aquí reproducimos extensos extractos traducidos de ese programa, incluyendo una sección importante sobre la asamblea constituyente y el gobierno obrero y campesino.

Por revivir y extender la herencia de la revolución constitucional

Hace más de setenta años el pueblo iraní se alzó contra el yugo de la autocrática monarquía Qajar y los agentes piráticos de los estados de Gran Bretaña y Rusia zarista.

Los objetivos esenciales de la revolución constitucional eran poner fin al dominio absolutista de la monarquía y los colonizadores extranjeros, y erigir un sistema democrático que expresara las aspiraciones y las reivindicaciones del pueblo de Irán.

Frente a la implacable movilización de las masas en busca de sus libertades políticas, la monarquía finalmente se vio



Trabajadores petroleros en Irán

Sus huelgas han sacudido toda la estructura social del país.

redactara una constitución y se estableciera un parlamento. A los ojos del pueblo la constitución representaba un freno a la monarquía y sus agentes.

Por primera vez en la historia de Irán, la revolución constitucional dio un golpe al dominio autocrático de la corte, dándole derechos al pueblo. La piedra angular de estos derechos fue el reconocimiento del derecho del pueblo a controlar su propio

En oposición a la opresión bajo los Qajar, el pueblo pedía los siguientes derechos:

- Libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de reunión y libertad de culto.
- El derecho a procesos legales en vez de las penas y los fallos arbitrarios administrados bajo el control de la monarquía.
- El derecho del pueblo a votar y a elegir sus propios representantes.
- El derecho a formar comités de diputados populares, responsables ante el pueblo mismo y no ante la monarquía.
- El derecho de armar al pueblo y organizar milicias populares.
- El derecho de las organizaciones de masas a administrar todos los asuntos de las poblaciones y provincias.
- El derecho a la liberación, y la cooperación voluntaria de todos los pueblos y nacionalidades que viven en Irán.
- El derecho de Irán a la independencia política y económica del imperialismo.

Con la derrota de la revolución constitucional, ninguno de estos logros pudo ser consolidado ni garantizado. Después de la derrota de la revolución constitucional, los estados imperialistas, los restos de la monarquía Qajar y las clases poseedoras colaboraron entre sí para enterrar las tradiciones de la revolución. La recopilación de las leyes básicas que se hizo después de la derrota de la revolución preserva el testimonio de todo lo que des-

EL IMPERIALISMO MUNDIAL TIENE CAUTIVO A IRAN MEDIANTE LOS PACTOS ECONOMICOS Y MILITARES. TODOS ESOS PACTOS QUE EL IMPERIALISMO NOS HA IMPUESTO DEBEN SER ANULADOS.

TODAS LAS COMPAÑIAS Y PROPIEDADES EXTRANJERAS DEBEN SER CONFISCADAS Y NACIONALIZADAS SIN PAGAR NI UN CENTAVO EN INDEMNIZACION.

nantes. Nada queda de los *anjomans* [consejos] y las *Mujahedin* [milicias populares] que dieron vida a la constitución. Tampoco queda nada de la libertad y la cooperación voluntaria entre las nacionalidades de Irán. Hay que revivir toda la herencia de esta revolución.

Por revivir y extender la herencia de la segunda revolución

La segunda revolución en Irán, que vino tras el fin del dominio de Reza Sha al concluir la Segunda Guerra Mundial, revivió la herencia de la revolución constitucional en varias maneras. Durante el dominio de Reza Sha todas las nacionalidades en Irán fueron sometidas a la opresión nacional y lingüística. La segunda revolución comenzó con la rebelión de las nacionalidades.

En Azerbaiján las mujeres lograron el derecho al voto. En menos de un año fue establecido en Azerbaiján un gobierno obrero y campesino. Después de la supresión de este levantamiento el 21 de Azar [12 de diciembre], se desarrolló un movimiento en todo Irán. En el curso de este movimiento los obreros organizaron sus propios sindicatos. La industria del petróleo fue nacionalizada. Además, comenzando en Azerbaiján y después en otras partes, de Irán también, los campesinos ocuparon las grandes haciendas. El golpe de estado del 28 de Mordad [19 de agosto de 1953] puso fin a esta segunda etapa de la revolución.

Dándose tras veinte años de una sofocante represión bajo Reza Sha, la segunda revolución tuvo como objetivos el logro de una serie de nuevos derechos:

- El derecho de las mujeres al voto y la participación en todos los asuntos de la sociedad.
- El derecho de las nacionalidades oprimidas a la autodeterminación.
- El derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos.
- El derecho de los campesinos a ser dueños de la tierra que trabajan.
- El derecho a establecer un gobierno de obreros y campesinos en vez de un gobierno de las clases propietarias.
- El derecho a nacionalizar la industria petrolera y rescatarla de manos de los imperialistas.

Hoy en día las masas iraníes están exigiendo una nueva serie de derechos además de los que buscaron en la segunda revolución. En base a la gran herencia de las revoluciones anteriores y a las urgentes necesidades actuales de Irán, el Partido Socialista de los Trabajadores propone la siguiente carta de derechos para los obreros y las masas trabajadoras.

Queremos lograr estos derechos en las fábricas, en el campo, en las universidades, en todas partes donde los obreros y las masas trabajadoras están librando sus luchas. Es urgente y vital crear una asamblea constituyente, sobre las bases que describimos más adelante, que se oponga

al régimen actual. Solamente de esta manera podrá el pueblo discutir los problemas que enfrenta el país y decidir cómo resolverlos.

Para lograr y consolidar estos derechos es preciso establecer un orden social nuevo en Irán, libre de la influencia y el dominio imperialista. El gobierno de las clases propietarias debe ser reemplazado por un gobierno de los obreros y campesinos. La sociedad debe reorientarse para que deje de servir los intereses de las clases dominantes y responda a los intereses de las masas obreras y trabajadoras.

Hay que establecer una asamblea constituyente lo más pronto posible

Ningún gobierno establecido desde arriba traerá la libertad a Irán. La tarea del pueblo es negarle apoyo a los gobiernos seleccionados desde lo alto. La tarea fundamental del pueblo es el establecer un gobierno que apoye sus intereses y sus luchas. El propósito de establecer un nuevo gobierno es lograr todas las reivindicaciones que están planteando los oprimidos y explotados en la sociedad. Pero el pueblo no puede ni debe esperar a ningún gobierno para lograr sus reivindicaciones. La pasividad dará lugar solamente a la perpetuación del viejo despotismo.

Los obreros, campesinos y todas las masas trabajadoras; las mujeres, las nacionalidades oprimidas y los estudiantes; y, por último, los soldados, todos deben organizarse para ganar sus demandas. Es imprescindible que se organice sin demora una asamblea única formada por diputados de todas las fuerzas populares políticas y religiosas. Aquellos sectores que se oponen a una asamblea constituyente, mientras que dicen defender los intereses del pueblo, de hecho se oponen a la expresión genuina de la voluntad de las masas. Por lo tanto los obreros, los soldados y los campesinos, las masas populares, no esperarán a que se convoque la asamblea constituyente, sino que mediante sus propias organizaciones, adoptando el llamado a la asamblea constituyente como la consigna central en su lucha por la democracia, avanzarán las condiciones para obtener todas sus demandas civiles, económicas, políticas y sociales.

La asamblea constituyente enfrenta las siguientes cuestiones de importancia fundamental para el país:

- La historia moderna de Irán es la historia del despotismo sin alivio y del atraso. Esta realidad indica que el camino para la solución de las cuestiones históricas básicas en Irán es la lucha por la democracia y el socialismo.

El dominio de la monarquía y los capitalistas en Irán es la fuente de todos los males sociales del país. El hambre, la miseria y el desempleo que existen en las ciudades y en el campo surgen de la penetración imperialista y el dominio de sus socios locales.

- Aún después del fin del dominio del

sha, la crisis del aparato del estado en desintegración amenaza al país con una catástrofe o con la restauración del gobierno militar.

• Los problemas que crean el peligro de una catástrofe no pueden ser resueltos sin métodos revolucionarios. La gran mayoría de los obreros y las masas trabajadoras de Irán exige que se adopten varias medidas revolucionarias.

El nuevo Irán debe erigir una nueva estructura gubernamental que se base en los siguientes organismos sociales y económicos. Una vez que sea establecida la asamblea constituyente, ésta debe discutir el establecimiento de las siguientes bases para un nuevo gobierno:

1. El gobierno:

Los gobiernos locales deben formarlos diputados elegidos democráticamente por las organizaciones de los obreros, los campesinos, los empleados de oficinas, los soldados, los universitarios y los estudiantes de secundaria.

El gobierno de todo Irán deben formarlos diputados de estas organizaciones, seleccionados en base a todo Irán con la cooperación voluntaria de diputados de las nacionalidades oprimidas.

Es imprescindible que todos los funcionarios de este gobierno, a todos los niveles, puedan ser removidos en cualquier momento.

Los salarios de los funcionarios en este gobierno no pueden ser superiores a los de un obrero promedio.

Tal gobierno puede dirigir la economía del país y resolver todas las cuestiones de la vida del país conforme con los intereses de la mayoría del pueblo y no de los explotadores. Para impedir la catástrofe económica que los capitalistas buscan desatar, los intereses del pueblo trabajador serán más importantes que la avaricia de los capitalistas que han monopolizado las riquezas del país.

2. Romper el yugo del imperialismo:

El imperialismo mundial tiene cautivo a Irán mediante los pactos económicos y militares. Todos estos pactos que el imperialismo norteamericano nos ha impuesto deben ser anulados, y todos los consejeros norteamericanos deben ser expulsados de Irán inmediatamente. Se debe poner fin inmediato al pacto militar CENTO y todos los acuerdos y pactos militares con países imperialistas y los estados controlados por ellos. Ni una gota de petróleo ha de exportarse a Sudáfrica ni a Israel.

Es imprescindible que las relaciones con estos gobiernos sean reemplazadas por la solidaridad con las masas palestinas y los negros de Sudáfrica. Todas las compañías y propiedades extranjeras deben ser confiscadas y nacionalizadas sin pagar ni un centavo en indemnizaciones. No debe pagarse ni un centavo de los intereses o la deuda principal de los miles de millones de dólares que los bancos y las compañías

LA TIERRA A LOS CAMPESINOS, LA TIERRA PARA QUIEN LA TRABAJA. QUITARLES LA TIERRA A LOS GRANDES TERRATENIENTES Y A LOS TERRATENIENTES AUSENTES, SIN PAGARLES INDEMNIZACION.

LAS NACIONALIDADES OPRIMIDAS DE IRAN DEBEN TENER DERECHO A LA AUTODETERMINACION, PARA EJERCERLO DE LA MANERA QUE CONSIDEREN.

imperialistas han prestado con el fin de chuparle la sangre al pueblo de Irán.

3. Unidad de los obreros y los campesinos y un programa de reforma agraria:

Para los pequeños agricultores y los campesinos sin tierra, las siguientes demandas son urgentes:

La tierra a los campesinos, la tierra para quien la trabaja. Quitarles la tierra a los grandes terratenientes y a los terratenientes ausentes, sin pagarles indemnización. Dar créditos a largo plazo y préstamos en términos favorables a los campesinos. Anulación total del pago de la deuda que tienen los campesinos con el estado por la tierra que les fue otorgada bajo la reforma agraria del sha. Abrir los archivos y libros de contabilidad del Banco Agrícola e instituciones relacionadas.

Los salarios de los trabajadores agrícolas deben establecerse en plena paridad con los de los trabajadores industriales. Las tierras y las propiedades de los grandes terratenientes y las granjas modelo deben ser confiscadas sin indemnización y distribuidas entre los campesinos pobres, o si no puestas bajo el control de los trabajadores agrícolas en forma de cooperativas o granjas colectivas. El programa para la nacionalización de la agricultura y su organización en base cooperativa debe diseñarse de tal manera que se elimine cualquier posibilidad de que los pequeños agricultores sean expropiados y forzados a integrarse a las cooperativas. Hasta que ellos reconozcan la posibilidad y la necesidad de emprender otro camino, los pequeños agricultores continuarán siendo los dueños de sus propias parcelas.

Los obreros y campesinos deben discutir cómo solucionar los siguientes problemas relacionados con las tribus nomádicas, sobre las cuales siempre han caído las presiones de los programas del gobierno. Hay que prestar especial atención a mejorar la vida económica de las tribus. Contra los asentamientos forzados de las tribus. Control por las tribus mismas del territorio que habitan.

4. Libertades civiles políticas:

Excarcelación de todos los presos políticos, regreso de todos los exiliados, abolición total de la censura, libertad de reunión y de manifestarse, libertad de pensamiento y de expresión, libertad para todos los partidos políticos, libertad e igualdad de derechos para todas las religiones, derecho de portar armas, libertad sindical, plenos e iguales derechos civiles y políticos para todos los trabajadores inmigrantes, paquistanos, afganes y otros. Es imprescindible que todos estos derechos sean instituidos y garantizados.

5. Libertad para las nacionalidades oprimidas:

Las violaciones más básicas de los dere-



Las masas se manifiestan en las calles de Teherán

la supresión de sus lenguas natales y la negación de su derecho a la autodeterminación. Estas violaciones de sus derechos también han sido la piedra angular del dominio de la monarquía Pahlavi, los capitalistas y los imperialistas en Irán. Es imprescindible que se les otorgue a estas nacionalidades la libertad de usar sus propios idiomas. Las nacionalidades oprimidas de Irán deben tener el derecho a la autodeterminación, para ejercerlo de la manera que consideren necesaria.

Debe declararse claramente ilegal la opresión en base al idioma, la cultura y la nacionalidad. Se necesitan programas especiales para la construcción de escuelas, universidades y otros servicios públicos en los distritos habitados por las nacionalidades oprimidas, los cuales deben ser emprendidos por el gobierno central como medidas de urgencia.

Solamente de esta manera los trabajadores persas podrán compensar a sus hermanos y hermanas azerbaijanis, kurdos, baluchistanos y árabes por la opresión a que los ha sometido el gobierno central. De esta manera podrán remplazar las divisiones fomentadas por el estado central con una unidad verdadera de los pueblos trabajadores de todas las nacionalidades en Irán.

6. Plena igualdad de derechos para las mujeres, liberación de las mujeres:

Las mujeres, esta gran masa de humanidad, han sido oprimidas y excluidas durante siglos. En la época moderna, las

víctimas de una doble explotación. La liberación de las mujeres es una de las tareas fundamentales de la revolución. Plenos derechos políticos y sociales y la plena igualdad para las mujeres. Igualdad de salario por trabajo igual.

A fin de asegurar la independencia económica de las mujeres, deben establecerse guarderías infantiles financiadas por el estado. El derecho de las mujeres a controlar sus propios cuerpos y a decidir si desean o no tener hijos. Este derecho incluye el derecho al aborto y la contracepción.

7. Fin a los secretos de negocios:

Los capitalistas, los dueños de la propiedad, los terratenientes, los patrones de las grandes compañías y los intermediarios del capital extranjero, los altos burócratas del ejército y del gobierno y los círculos de la corte han mantenido sus actividades en secreto total para esconder su saqueo del país. Deben abrirse todos los libros de contabilidad y las cuentas de las transacciones secretas de estos ricos para que sus robos sean conocidos por todos. Lo que hicieron los empleados del banco central es un caso ejemplar de la importancia de esto.

8. Contra la fuga de capital del país, contra la destrucción y el sabotaje de la producción por los capitalistas:

Todas las propiedades de los capitalistas y los ricos, que les han robado miles de millones de *tumans* [7 *tumans* equivalen a US\$1] a los pobres, y quienes han sacado

LA REVOLUCION IRANI HA DESATADO UN PERIODO DE SANGRE Y DE HIERRO EN TODA LA REGION, LA ERA DE LA REBELION DE LOS OPRIMIDOS CONTRA LAS CLASES OPRESORAS. ASI, AL ERIGIR UN GOBIERNO DE OBREROS Y CAMPESINOS, LAS MASAS TRABAJADORAS DE IRAN SENTARAN LAS BASES PARA LOS ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS DEL MEDIO ORIENTE.

das y nacionalizadas en forma de propiedad popular sin que se pague ni un centavo de indemnización.

9. Control por parte de los obreros y las masas trabajadoras sobre los bancos, la industria, el comercio y los servicios sociales:

Los parásitos capitalistas se han engordado de la explotación de los trabajadores. Los trabajadores deben tener el derecho a saber los "secretos" de los bancos, las fábricas y todos los sectores de la industria básica, el transporte y la economía en su conjunto. El control de las fábricas por parte de los patrones debe ser remplazado por el control obrero. De esta manera, el control por parte de los obreros y el pueblo trabajador debe establecerse sobre los bancos, la industria básica y el comercio en general.

Las oficinas, las instituciones y las grandes compañías estatales que explotan a millones de trabajadores iraníes (obreros, maestros, funcionarios, etc.) para el beneficio de los capitalistas deben ponerse bajo el control de comités obreros, en cooperación con comités y sindicatos de empleados públicos, para formar un verdadero sistema de servicios sociales para el pueblo trabajador.

10. Contra la inflación y el desempleo:

Los trabajadores no pueden ni deben ser los que cargan el peso de la salvaje explotación de los capitalistas y los desastres económicos que causan. Frente a las continuas alzas en los precios de artículos de consumo, los trabajadores deben recibir ajustes salariales según el alza en el costo de la vida. La tasa de inflación la deben medir comités de trabajadores, especialistas honestos y estadísticos leales a los trabajadores. Cada trabajador debe recibir un salario suficiente que le asegure por lo menos un nivel de vida decente.

A todo el que quiera trabajar se le tiene que garantizar un empleo. La semana de trabajo no ha de pasar de las cuarenta horas. Con el fin de aumentar el número de empleos, el gobierno debe crear proyectos de obras públicas tales como la construcción de viviendas, ciudades, escuelas, universidades, guarderías infantiles, parques, caminos y demás. Hay que poner fin a la apropiación de enormes cantidades de dinero para el ejército, la policía y las guardias rurales; este dinero debe usarse en vez para la construcción de obras públicas útiles.

De igual manera debe establecerse un sistema de impuestos directos y progresivos, que aumenten marcadamente con cada aumento en el nivel de ingresos. Los obreros y el pueblo trabajador deben quedar exentos de pago de impuestos. Deben anularse los impuestos indirectos sobre productos como el azúcar, los alimentos y los artículos de primera necesidad para las masas.

de vida de los trabajadores, deben instituirse programas de seguro social y bienestar público, especialmente un seguro de desempleo. Los obreros y funcionarios menores del gobierno deben tener vacaciones anuales de por lo menos un mes con goce de salario, así como pensiones que les permitan vivir decentemente después de la edad de cincuenta años. Los salarios de las mujeres, los jóvenes y los trabajadores inmigrantes deben ser iguales a los de los demás trabajadores.

11. Nacionalización de los bancos, las compañías de seguros, las industrias básicas y el transporte:

Sin que se regulen las actividades de los bancos es imposible controlar y regular la producción y distribución de los productos para las necesidades humanas. Y, sin el control total de esto es imposible lograr avances fundamentales en cuanto a mejorar las miserables condiciones de vida de las masas. Por medio de los bancos los capitalistas llevan a cabo sus proyectos para saquear a los trabajadores pobres. Todos los bancos deben ser nacionalizados y combinados en un solo banco del estado. Todas las compañías de seguros deben ser nacionalizadas.

Si se va a intentar seriamente regular la economía para satisfacer las necesidades humanas, hay que nacionalizar y colocar bajo control del estado los bancos y la industria básica y las ramas más importantes del comercio. Tales nacionalizaciones son de un tipo fundamentalmente diferente a las que realizó la monarquía. Las compañías "nacionalizadas" del petróleo del gas, de la petroquímica y del acero fueron todas creadas con el propósito de incrementar la explotación y el saqueo llevado a cabo por los capitalistas, la monarquía y los imperialistas.

Los banqueros y los capitalistas no deben recibir indemnización ni por la menor parte de su botín. La expropiación de los principales medios de producción y distribución es algo totalmente diferente a quitarles la propiedad a los campesinos, pequeños comerciantes y profesionistas.

12. Por un monopolio del comercio exterior:

Todo el comercio exterior debe ser un monopolio del estado para que así sea el pueblo el que lo controle para beneficio de la sociedad.

13. Disolución de SAVAK, la policía y las guardias rurales; libertades políticas para los soldados; armas para el pueblo:

Todos los cuerpos represivos deben ser abolidos. Deben abolirse la policía y las guardias rurales. La tarea de mantener el orden en el campo y las ciudades deben realizarla grupos armados del pueblo, los trabajadores y los campesinos.

Es imprescindible poner fin a la represión en el ejército. Hay que dismantelar la jerarquía militar. Hay que democratizar

plenas libertades políticas y civiles. Comités de soldados deben elegir a los oficiales del ejército.

Es imprescindible que se dismantelen todos los tribunales especiales y militares. Todos los jueces deben ser elegidos y todos los juicios deben ser ante jurados escogidos entre la población. El pueblo mismo será el administrador de la justicia.

A fin de defender la unidad revolucionaria entre los obreros y los campesinos contra los capitalistas y los imperialistas, a fin de defender la república de obreros y campesinos, todo el mundo debe estar armado. La organización de la milicia Mojahedin en los días del Anjomán de Tabriz durante la revolución constitucional es un caso ejemplar de cómo organizar una milicia popular. Esto también lo ejemplifican las fuerzas de defensa de Amol y otras ciudades. Otros ejemplos son las guardias de defensa obrera en las fábricas y en los campos petroleros. A medida que tales organizaciones de defensa se extienden más y más en las ciudades, en los centros proletarios y en las aldeas, los soldados, quienes son hijos de las masas trabajadoras, recordarán sus orígenes de clase y serán ganados al lado de los obreros y las masas trabajadoras.

14. Solidaridad internacional:

Cuando los trabajadores controlen la sociedad, se habrán sentado las bases para avanzar hacia una sociedad de abundancia. Pero tal progreso sólo es concebible con la solidaridad de los obreros y las masas trabajadoras de otros países. Mientras permanezca aislada y asediada en un mundo de explotación y miseria, una república obrera y campesina no podrá dar muchos pasos hacia adelante.

La gran revolución del pueblo desheredado de Irán ya ha tenido un gran impacto en todos los países vecinos.

¿Podría haber sido de otra manera? Los pueblos de Turquía, Pakistán y Afganistán observan la revolución en Irán. Se sienten inspirados por ella y les está dando confianza en sí mismos. Sin cada el grito de libertad también tendrá reverberaciones en la Unión Soviética. Tras años de estar aislados, los revolucionarios palestinos han escuchado la poderosa voz de la solidaridad alzada por millones de iraníes. Los negros de Sudáfrica han encontrado un aliado en el pueblo de Irán. La revolución iraní ha desatado un periodo de sangre y de hierro en toda la región, es decir, la era de la rebelión de los oprimidos contra las clases opresoras. Así, al erigir un gobierno de obreros y campesinos, las masas trabajadoras de Irán sentarán las bases para los "Estados Unidos Socialistas del Medio Oriente".

La propuesta del Partido Socialista de los Trabajadores para la constitución, "La carta de derechos para los obreros y las masas trabajadoras de Irán", será sometida a discusión y ratificación ante el